

Vulnerabilidad fiscal

La reciente polémica en torno a los traspasos de fondos desde Corfo al Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa un problema que Chile arrastra hace más de una década: el deterioro de sus cuentas fiscales y la fragilidad de su política de equilibrio estructural.

Más allá de las explicaciones del ministro Mario Marcel, la realidad es que la economía del país enfrenta un nivel de endeudamiento preocupante, que no solo compromete la gestión del actual gobierno, sino que también será una pesada carga para la administración que lo suceda.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha advertido que la situación de las finanzas públicas es crítica. En apenas 16 años, Chile pasó de ser un acreedor neto a un deudor neto del 37,7% del PIB. Este deterioro no se ha debido únicamente a factores externos, sino a decisiones políticas que han privilegiado el gasto sin garantizar fuentes de ingresos permanentes. Un ejemplo claro es el tratamiento de Codelco, cuyas utilidades han sido sistemáticamente absorbidas por el Estado sin permitirle una reinversión acorde con su importancia estratégica.

El informe del BCI y las declaraciones de economistas como Óscar Landerretche refuerzan la idea de que Chile ha dejado de lado la disciplina fiscal, dependiendo excesivamente de ingresos extraordinarios por commodities para sostener el gasto público. La ausencia de una estrategia clara para equilibrar las cuentas y reducir el déficit estructural hace que el país esté en una posición de vulnerabilidad frente a shocks externos. La actual coyuntura global, con un panorama económico incierto y la

posibilidad de cambios drásticos en la economía estadounidense, agrava aún más el escenario.

El ajuste del 0,2% del PIB anunciado por la Dirección de Presupuestos es insuficiente, y aunque el CFA sugiere recortes adicionales del 0,5%, estos son prácticamente inviables en un año electoral. La falta de margen de maniobra pone de relieve la debilidad de las proyecciones fiscales y la urgencia de aplicar medidas concretas. No se puede seguir dependiendo de la esperanza de un repunte del litio o de un crecimiento económico inesperado para tapar los problemas estructurales.

La fragilidad fiscal no es solo un problema del gobierno actual, sino una cuestión de Estado que requiere un compromiso transversal. Independiente de la administración de turno, es imperativo retomar la senda de la responsabilidad en el gasto público, fortalecer la institucionalidad fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas a largo plazo. Sin una política clara para reducir la deuda y equilibrar el presupuesto, Chile corre el riesgo de perder credibilidad ante los mercados y de ver restringida su capacidad de respuesta ante futuras crisis.

El desafío, que es enorme, exige necesariamente voluntad política, liderazgo y una mirada de largo plazo. La experiencia de los últimos años ha demostrado que sin disciplina fiscal, el país solo seguirá acumulando deudas y postergando decisiones que tarde o temprano tendrán un costo mayor. Ahora es el momento de actuar con responsabilidad y evitar que la vulnerabilidad fiscal se convierta en una crisis irreversible.